INFORME DE VALORACIÓN SOBRE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y REGULA EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES DE ANDALUCÍA Y EL DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRARIOS Y FORESTALES EMITIDO POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA .

El presente informe se emite en respuesta a los requerimientos y consideraciones reflejados en el informe evacuado LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, en fecha de 7 de marzo del año en curso, bajo la referencia EXPTE.: DL 3644/2016/lbg, sobre el proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el Documento de Acompañamiento del Transporte de Productos Agrarios y Forestales.

El citado informe se estructura en 3 apartados:

- 1.- ANTECEDENTES, COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO
- 2.- TRAMITACIÓN
- 3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO
 - A) Al Preámbulo
 - B) Al Articulado
- 4.- CONCLUSIÓN

A continuación se analiza y valora cada uno de los apartados.

APARTADO “1.- ANTECEDENTES, COMPETENCIA Y RANGO NORMATIVO”

Tras mostrarse conformidad con la adecuación “a derecho tanto la competencia que se ejerce, como el rango normativo utilizado”, se realizan las 4 consideraciones que se extractan resumidamente y se comentan a continuación:

- 1. *“No obstante lo anterior, dado que la finalidad manifestada en el preámbulo de la norma, tanto del registro como del documento de acompañamiento al transporte, es garantizar la salubridad y seguridad de los alimentos, se considera necesaria la participación de las entidades locales, a través del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (artículo 57.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, LAULA), ya que en la misma se establece como competencia municipal la promoción, defensa y protección de la salud pública, y dentro de la protección de la salud, la LAULA define como competencia municipal el control sanitario oficial de la distribución de alimentos (art. 9.13. h) [..].”*

En atención a la citada observación, se ha procedido a solicitar el citado informe.

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	1/31

2. *“Para terminar, el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, en su artículo 1, señala las competencias de la Consejería de Salud: Corresponde a la Consejería de Salud, además de las atribuciones asignadas en el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las siguientes competencias:*

- a) La ejecución de las directrices y los criterios generales de la política de salud, planificación y asistencia sanitaria, asignación de recursos a los diferentes programas y demarcaciones territoriales, alta dirección, inspección y evaluación de las actividades, centros y servicios sanitarios y aquellas otras competencias que le estén atribuidas por la legislación vigente.*
- b) Las políticas de consumo de la Junta de Andalucía.*
- c) Todas aquellas políticas de la Junta de Andalucía que en materia de salud y consumo, tengan carácter transversal.*

Concretando el artículo 8, referido a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica: A la persona titular de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y, en especial, las siguientes funciones:

- e) La dirección, ejecución y evaluación de las competencias que corresponden a la Consejería en materia de promoción, prevención, vigilancia, protección de la salud y salud laboral, así como el control sanitario y la intervención pública en seguridad alimentaria, salud ambiental y otros factores que inciden sobre la salud pública.*
- f) La gestión y ejecución de la acción territorial en salud pública, incluido el asesoramiento a los planes locales de salud, sin perjuicio de las competencias municipales en esta materia.*

Por lo anterior, sería conveniente dar participación en la elaboración del presente proyecto, tanto a la Consejería de Salud, como a las entidades locales, para el caso de que el centro directivo proponente mantenga como finalidad de la norma propuesta la seguridad alimentaria y su trazabilidad”.

Se ha procedido a solicitar, igualmente, el informe a la Consejería de Salud.

3. *“Por otro lado, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, constan en el expediente las preceptivas publicaciones del texto propuesto, con sus memorias e informes, habiéndose dado adecuado cumplimiento a esta obligación.*

En lo referente al bloque de materias electrónicas necesarias para la tramitación del procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un lado, en su disposición transitoria cuarta, establece que «Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones...». Y por otro, respecto de la Administración del Estado, dicha regla general tiene una determinación específica, señalando en su disposición transitoria segunda que hasta la no entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán:

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/			
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	2/31

«a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.»

No obstante, dichas previsiones hay que relacionarlas necesariamente con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que establece que las materias relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico no producirán efectos hasta transcurridos dos años de la entrada en vigor de la Ley, esto es, el 2 de octubre de 2018 (disposición final séptima).

En esta línea se manifiesta el Gabinete Jurídico de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en su Informe HPPI00555/16 de 7 de febrero de 2017, al establecer las siguientes conclusiones:

«1. En tanto en cuanto no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico el 2 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, cualquier precepto de la Ley que se encuentre directamente vinculado con dichas materias, requerirá la plena efectividad de estas herramientas electrónicas para que a su vez puedan tener plenos efectos.

2. Conforme a lo anterior la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones impuesta por el artículo 14 de la LPACAP, queda diferida hasta octubre de 2018 en tanto en cuanto tiene íntima vinculación con el ámbito material de la disposición adicional séptima de la Ley 39/2015.

3. Hasta que produzcan efectos dichas previsiones, las normas que servirán de fundamento jurídico en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la LPACAP serán las previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.»

Lo expuesto en el citado informe, conllevaría la no exigencia de la obligación de relacionarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos para los potenciales solicitantes de las mismas hasta 2 de octubre de 2018”.

En la elaboración del presente Decreto se ha tenido en cuenta el Derecho transitorio aplicable en cada escenario temporal, partiéndose de la base de que difícilmente será publicado antes de octubre del año en curso. No obstante, se ha tenido especial cuidado en garantizar que, aun cuando entrara en vigor con anterioridad a esa fecha, no se requiere a los interesados el cumplimiento de obligaciones de contenido imposible (por no estar dispuestos los medios técnicos para ello) o que no resulten vigentes (por lo que respecta al bloque de materias electrónicas, principalmente por aplicación de la vacatio legis prevista en la disposición transitoria 4ª la Ley 39/2015, de 1 de octubre). Así, por ejemplo, el apartado 1 del artículo 12 indica que “En el caso de actuar mediante representación, la misma deberá ser acreditada por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	3/31

existencia (poder notarial de representación, mención expresa en escrituras de constitución de la sociedad, etc.). A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento efectuado por comparecencia personal o comparecencia en la correspondiente sede electrónica". Es decir, el precepto no obliga a otorgar representación por este medio, pero sí reconoce a todos los efectos el derecho a la representación mediante comparecencia en la sede electrónica (debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 6.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, asiste derecho al interesado de otorgar "Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración" por lo que, consecuentemente, resulta factible que se otorguen apoderamientos a través de una plataforma distinta de la de la Junta de Andalucía, para actuar en nombre del poderdante, en todos los procedimientos, incluidos los que se tramitan en nuestra Comunidad Autónoma).

4. *"En cuanto a la derogación normativa, según lo dispuesto en el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, para generar un marco normativo integrado, claro y de certidumbre, se recomienda se examine por ese Centro Directivo, si el nuevo texto normativo afecta a otras normas además de las citadas en la disposición derogatoria, al objeto de incluirlas. Por otra parte, también sería posible aprovechar la aprobación del presente proyecto de decreto para derogar otra normativa que, según el conocimiento del centro directivo, se encuentre vigente, pero sin aplicación efectiva, pudiendo crear confusión, o derogada tácitamente, siendo siempre preferible por la citada seguridad jurídica la derogación expresa".*

Ese examen ha sido realizado, concluyéndose que sólo son derogables las disposiciones que se recogen en la Disposición derogatoria única del proyecto de Decreto que nos ocupa.

APARTADO "2.- TRAMITACIÓN"

Por la Secretaría General Técnica se muestra conformidad con la tramitación seguida y se recuerda que:

1. *"...una vez evacuado el presente informe, el texto resultante del mismo, junto con el resto del expediente, se remitirá por la Secretaría General Técnica, a través del Servicio de Legislación y Recursos, a la Viceconsejería, a los efectos de que ésta solicite informe al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, de conformidad con el artículo 78.2.a) del Decreto 450/2000, de 26 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía".*
2. *"Asimismo, dado que corresponde a cada órgano directivo dar de alta y mantener actualizados en el Registro de Procedimientos Administrativos de la Junta de Andalucía (RPA) los distintos procedimientos que afecten a su ámbito competencial, en el momento en que la norma sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, deberán confirmar el alta del mismo y proceder a su publicación en dicho Registro para que, de este modo, el procedimiento en cuestión sea accesible por la ciudadanía a través del Catálogo de Procedimientos Administrativos. En todo caso, se deberá facilitar al Servicio de Legislación y Recursos la hoja de detalle acreditativa del alta y publicación del procedimiento".*

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	4/31

APARTADO “3.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO”

Este apartado se divide, a su vez, en 3 subapartados “Comentario general”, “Preámbulo” y “Articulado” incluyéndose en este segundo subapartado las disposiciones adicionales, derogatorias y finales y los anexos.

Comentario general

“Como comentario general a la norma propuesta hay que señalar que se crea un nuevo registro que por un lado se nutrirá principalmente de los datos obrantes en otros registros y por otro lado, se nutrirá de los datos que tendrán que aportar todos los productores agrícolas, ganaderos y forestales. Se justifica la creación del nuevo registro en la seguridad alimentaria y la trazabilidad, por la facilidad de consulta al tener todos los datos agrupados.

Por lo anterior, se debería mejorar la justificación de la creación del nuevo registro y las nuevas utilidades que aporta, ya que no se van a eliminar los registros de cuyos datos se nutre, ni suplir sus utilidades, pudiendo dar la idea de que están redundando.

Por otra parte existe una clara diferencia entre la justificación manifestada en el preámbulo de la norma y la memoria justificativa. En el preámbulo los argumentos justificativos principales son la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos, apelando a lo establecido en:

- *el Reglamento (CE) n° 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria,*
- *el Reglamento (CE) n° 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios,*
- *el Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola,*
- *la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía y,- la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.*

Sin embargo, la memoria justificativa de la norma manifiesta: “El Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (en adelante, REAFA) y el Documento de Acompañamiento al Transporte de productos agrarios y forestales (en adelante, DAT) responden a esos nuevos retos al proporcionar la delimitación gráfica de dichas explotaciones, la identificación de las personas titulares y la posibilidad de establecer una trazabilidad desde el origen. Incorporará aspectos agronómicos, ambientales y económicos que conducirán a la toma de decisiones de manera óptima, sirviendo así como medio de desarrollo de la política agraria y ambiental, a la vez que se garantizan la eficacia y eficiencia en la aplicación y la gestión de acciones y ayudas en los sectores involucrados, así como el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria y sobre los programas de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola”. Se puede comprobar que aquí la trazabilidad es una consecuencia de tener recopilada toda la demás información, cuyo fin es la toma de decisiones en la política agraria y ambiental. Este último fin es el que justifica la mayoría de los datos que contiene el nuevo registro. De hecho las normas medioambientales citadas sí que son de carácter intervencionista, anteponiendo la planificación y los instrumentos públicos a la iniciativa privada en la gestión

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	5/31

medioambiental. Por ello se sugiere que se incluyan todos los fines en el preámbulo del proyecto de decreto, toma de decisiones en la política agraria y ambiental, facilitar el control y la gestión del sector, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

También hay que señalar que no aparece en el texto propuesto ningún límite en el acceso público a los datos que contiene, lo cual puede ser problemático, sobre todo al no establecerse con especificidad los fines de la recogida de datos y su tratamiento, no articulándose tampoco límites en cuanto al acceso de los operadores según los intereses y competencias”.

Se ha procedido a revisar la redacción del preámbulo al objeto de dar una más clara justificación de la creación del nuevo registro y de las utilidades que aporta, armonizándose, de este modo, con la memoria justificativa. En la nueva redacción se pone el acento en las necesidades que se pretenden abordar (“...la obligación de atender los mandatos expresos del artículo 5 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, 6.1 de la La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias y artículo 3 y concordantes del Reglamento (CE) nº 436/2009 de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 479/2008 del Consejo en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola en los términos expuestos. En este sentido, las necesidades que impulsan la norma que nos ocupan definen igualmente sus principales fines. Garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad de productos, facilitar el favorecimiento de la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural a través de un registro que asuma las titularidades compartidas, garantizar una efectiva libertad de competencia, mediante un instrumento (DAT) que dificulte la sustracción ilegítima y posterior venta de productos agrícolas y simplificar los procedimientos en el ámbito agroforestal”) y en los medios (REAFA y DAT soportados por delimitaciones geográficas y esencial información alfanumérica) que se han considerado más idóneos para alcanzar los mismos. Obviamente, las necesidades que se pretenden acometer definen los fines del Decreto (los fines son satisfacer las necesidades expuestas) y, por ende, la finalidad de la recogida de datos.

A) Al Preámbulo.

- “Párrafos 1º a 3º: se dedican a la ponderación de la trazabilidad en los productos alimenticios, concluyendo con el recordatorio de la constitución del REGEPA, y significando que el mismo se nutre de los datos que le suministra el REAFA, lo cual por un lado no es posible, ya que el REAFA se está creando con el presente proyecto de decreto, y porque el REGEPA lleva más de dos años funcionando y nutriéndose de los datos existentes en otros registros que ya están en funcionamiento. En otras comunidades autónomas se ha establecido tan solo la obligación de rellenar un formulario electrónico de alta. De hecho el artículo 4.3 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, establece que “la Solicitud Única de ayudas de la PAC o POSEI tendrá consideración de notificación para la inscripción en el REGEPA”. El Reglamento 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, tiene por objeto a los establecimientos de producción de alimentos, la higiene alimentaria, entendida como la manipulación de materias primas que luego se podrán consumir directamente, en este sentido muchas de las materias primas producidas en el sector agropecuario necesitan de un tratamiento posterior para poder ser objeto de consumo, por lo que en esa primera fase estarían fuera del ámbito de este reglamento, como por ejemplo puede ser la

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	6/31

aceituna”.

Comentar que:

- en ningún momento se indica que el REAFA – que ni siquiera se ha constituido todavía - nutre al REGEPA. Lo que se dice, textualmente es que *“Dicho Registro (el REGEPA) se nutrirá de los datos de los diferentes registros autonómicos, siendo el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (en adelante REAFA) desde donde partan los datos de la Comunidad Autónoma Andaluza”.*
- Por otro lado, carga administrativa que impone el REAFA se reduce, al igual que en otras comunidades, a cumplimentar un formulario. No se impone la obligación de que, en todo caso, dicho formulario sea electrónico porque no lo permite el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dado que no todos los destinatarios de la norma ostentan una *“capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos”* que acrediten *“que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”.* El formulario de *“Declaración Anual de Producción”*, como su propio nombre indica, es para declarar la producción anual, no para tramitar la inscripción en el REAFA/REGEPA. No obstante, se adelanta que dicho anexo no se publicará en este Decreto, sino mediante Orden posterior una vez que se tenga la garantía de que las herramientas web actualmente en desarrollo están operativas y permiten la cumplimentación del mismo de forma telemática, de tal modo que el interesado pueda elegir entre uno y otro medio de comunicación (de lo contrario
- Por último, en los 3 años que lleva en funcionamiento el REGEPA, no se ha podido obtener, para su traslado al citado registro, toda la información que precisa el *Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola*, dado que no todas las explotaciones tienen la obligación de inscribirse en alguno de los Registros que hay constituidos en la actualidad (por ejemplo, las explotaciones de frutas y hortalizas, aprovechamientos hortícolas intensivos que no pertenezcan a ninguna OPFH), ni la estructura de todos estos Registros soporta la totalidad de datos que requiere la norma. Disponer de la información necesaria para el cumplimiento de la citada norma es, como se adelantaba, uno de los objetivos del REAFA.
- En absoluta consonancia con el artículo 4.3 del *Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola*, el presente proyecto de Decreto prevé:
 1. En la disposición adicional primera, que *“Se incorporarán e interoperarán con el REAFA la información y los datos”* de 13 registros entre los que figuran la PAC y el POSEI.
 2. En su artículo 15.1, que *“En aquellos supuestos en los que se compruebe la falta de inscripción, la modificación o el cese de actividad de una explotación, la Dirección General competente en materia de producción agrícola y ganadera, o la competente en materia de gestión del medio natural, en su caso, podrá ordenar su inscripción de oficio en el REAFA”.*
 3. En su artículo 16.2, respecto de la declaración anual de producciones agrícolas, que *“Los titulares de explotaciones agrícolas que hayan comunicado la información requerida mediante la Solicitud Única de Ayudas de la PAC, la*

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	7/31

Declaración de Efectivos Productivos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), la Declaración de las producciones de semillas y plantas de vivero, la Declaración de Cultivo de Viñedo o mediante cualquier otro Sistema de Información gestionado por la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural estarán exentos de cumplir este requisito”.

- La normativa que se cita resulta complementaria con el proyecto de Decreto que se propone, dado que cubre la fase previa a la regulada por el Reglamento 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

*- **Párrafos 4º, 5º y 6º:** establecen que el REAFA cumple con el mandato de crear un registro autonómico establecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y en el Reglamento (CE) n° 436/2009 de la Comisión, de 26 de mayo de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) número 479/2008 del Consejo en lo que respecta al registro vitícola, a las declaraciones obligatorias y a la recopilación de información para el seguimiento del mercado, a los documentos que acompañan al transporte de productos y a los registros que se han de llevar en el sector vitivinícola. Sin embargo estas normas establecen unos contenidos menores a los del REAFA y con unos fines bien definidos.*

Obviamente, cualquiera de las citadas normas aisladamente considerada preceptúa unos requerimientos menores que el REAFA, que suma los de todas estas y, además, otras normas y necesidades. En cuanto a los fines, se ha trabajado en la redefinición y clarificación de los mismos en los términos anteriormente expuestos.

*- **Párrafos 7º y 11º:** en los mismos se pondera de nuevo la trazabilidad como medio eficaz de garantía de la seguridad alimentaria. Asimismo se recuerda la obligación de los productores de estar dados de alta en todos los registros y hacer las diferentes comunicaciones a las que legalmente estén obligados y facilitar las labores de inspección y control.*

El artículo 6.1 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía establece: “Con el fin de cumplir las obligaciones, los operadores agroalimentarios y pesqueros deben implantar un sistema de gestión de la calidad comercial. Quedan exceptuados de dicha obligación los agricultores, ganaderos, pescadores y demás operadores de productos primarios, siempre que no destinen directamente su producción a los consumidores finales, o estén incluidos en una denominación de calidad, en cuyo caso se estará a lo que disponga la normativa aplicable.”

En este sentido se afirma que tanto el DAT como el REAFA son elementos esenciales de estas labores, pero la legislación que les sirve de base es de 2011, con lo cual queda claro que las labores que se reclaman para ambos instrumentos ya se están llevando a cabo desde hace años por otros medios, que no se citan, ni se dice que se vayan a sustituir con los nuevos instrumentos que se regulan en este decreto. En este sentido se recuerda el Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor, que cumple con casi todos los fines que se expresan. Existe actualmente una minuciosa regulación de los productos que necesitan documentos de acompañamiento, tanto por razones de seguridad alimentaria como de trazabilidad, sin que tal obligación se haya considerado necesaria hacerla general por los legisladores comunitario o nacional, por lo que se recomienda en este sentido la reconsideración respecto a la generalización del REAFA y el DAT al menos para los fines de trazabilidad y seguridad alimentaria.

Código:640xu852N1CQ7CZDtW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	8/31

En primer lugar, precisar que mediante este borrador no se aplica el artículo 6.1 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, sino el artículo 6.6 de la citada Ley¹, en el que si se establece, con carácter general, la citada obligación, que el REAFA pretende cubrir.

Como se comentaba anteriormente, no se dispone de la estructura jurídica necesaria para acopiar toda la información que requiere la normativa actual ni para garantizar una correcta trazabilidad de todos los productos agroforestales de Andalucía. A pesar de que hayan transcurrido 7 años desde la entrada en vigor, de la Ley /2011, de 25 de marzo, no existen los mecanismos necesarios. El Decreto que se propone pretende, precisamente, prestar la cobertura necesaria para el despliegue de los mismos.

En cuanto al Decreto 163/2016, de 18 de octubre, por el que se regula el régimen administrativo y el sistema de información de venta directa de los productos primarios desde las explotaciones agrarias y forestales a las personas consumidoras finales y establecimientos de comercio al por menor, se limita a un colectivo muy concreto y no resulta extensible al resto de las explotaciones agroforestales de Andalucía. El REAFA pretende servir de base para la planificación y ejecución de los planes de control de higiene de la producción primaria agrícola, tal y como se establece en artículo 4.3.e) del proyecto de Decreto. En la actualidad los controles que se están practicando no afectan a la totalidad de las explotaciones por ausencia de esta información.

El DAT pretende dar la máxima trazabilidad a los productos agroforestales de tal modo que, en caso de emergencia alimentaria/sanitaria, se pueda georeferenciar de forma rápida y segura el origen al objeto de focalizar la investigación en los elementos que proceda.

En cuanto a la existencia de otros documentos de acompañamiento al transporte, exceptuando los productos vitivinícolas y la regulación de transporte de animales y obviando los documentos de carácter tributario en exportaciones intracomunitarias (CE) no está funcionando en Andalucía ningún otro. De hecho, el DAT, que se justifica por las anteriormente apuntadas razones, es, además, una creciente demanda del sector agroforestal. Resulta elocuente que casi todas las Comunidades Autónomas hayan constituido sus propios Registros de Explotaciones Agrarias y que, en los sectores más importante de la cada uno de ellas (vitivinícola, aceituna, etc.), se hayan creado documentos de acompañamiento al transporte. Se hace constar que, a nivel provincial, con las escasos medios jurídicos que se disponen, se han publicado por distintos medios Documentos de Acompañamiento al Transporte en un vano y desesperado intento, dado su reducido ámbito (provincial) y su incapacidad de establecerlos preceptivamente, de resolver las demandas del sector.

Respecto a la reconsideración de la necesidad, tanto de REAFA como del DAT, nos remitimos a la expuesto respecto del preámbulo. Los trabajos relativos a este Decreto se remontan al año

¹ Artículo 6. Obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesqueros.

“1. .../.

6. En el supuesto de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación de productos alimentarios o materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias habrá de ir acompañado de un documento, en el cual constarán los datos necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía tengan la adecuada y suficiente información. Este documento, como mínimo, habrá de incluir la identificación y domicilio del suministrador o suministradora, las características principales del producto, en particular la calidad, naturaleza, origen, composición, utilización, finalidad, designación, denominación, categoría, fecha de producción o caducidad, instrucciones de uso, condiciones de producción y distribución, el nombre, dirección e identificación de la persona fabricante, y el detalle correspondiente a la certificación, en su caso.

.../.”

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	9/31

2014. Este centro directivo considera que el REAFA, principalmente, y el DAT tienen una importancia estratégica en el sector agroforestal, que deriva, insistimos, de la necesidad de dar cumplimiento a la normativa actual, garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad de productos, favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural a través de un registro que asuma las titularidades compartidas y garantizar una efectiva libertad de competencia, mediante un instrumento (DAT) que dificulte la sustracción ilegítima y posterior venta de productos agrícolas y simplificar los procedimientos en el ámbito agroforestal.

- **Párrafos 8º, 9º y 10º:** se hace un repaso de la legislación fundamental en materia de montes y aprovechamientos forestales y se manifiesta que los registros ahora existentes serán interoperables con los nuevos que se crean.

Nada que comentar.

- **Párrafo 12º a 15º:** Se repite la idea de la interoperabilidad como justificación de la creación del REAFA. Por su lado, la seguridad patrimonial de los productores es la que fundamenta el DAT. Se sugiere mejorar la fundamentación de la necesidad de la creación de estos dos nuevos procedimientos, con la carga administrativa que conllevan, por ejemplo en que en el medio plazo irán reemplazando a la mayoría de los registros de los que ahora se van a nutrir, simplificándose con ello los trámites y disminuyendo las cargas administrativas.

Se acepta la sugerencia y se procede a la mejora de la justificación de ambos instrumentos.

- **Fórmula promulgatoria:** la referencia a la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, debe hacerse a los artículos 21.3, 27.9 y 44; e incluir la cita correspondiente al Consejo Consultivo, adoptando alguna de las siguientes fórmulas: “de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía”, si se adopta de conformidad con el dictamen; o “oído el Consejo Consultivo de Andalucía”, si se aparta de él. Por ello, se propone la siguiente o similar redacción:

“En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con los artículos 21.3, 27.9 y 44.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (...) el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día (...),” B) Al Articulado.

Se modifica la redacción en el sentido apuntado.

Artículo 1. Objeto.

La redacción debe ser en presente indicativo, porque el registro se crea con este decreto.

Se modifica la redacción en el sentido apuntado.

No se establecen con la debida claridad los fines y objetivos del registro, “dar cumplimiento de la europea y nacional y atender intereses generales diversos”, debe eliminarse.

Se propone: “... (DAT), cuyos fines son facilitar la trazabilidad facilitar la trazabilidad de los productos alimentarios, la defensa de la competencia, el control oficial de la higiene de las producciones agrarias y de la actividad agroforestal en las explotaciones”.

Hacerlo es dar seguridad jurídica a los interesados ya que, siendo el objeto de inscripción tan amplio

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	10/31

así como los fines perseguidos, se deben delimitar, aunque sea de forma genérica para en su caso poder valorar si una acción u omisión concretas entran o no en el ámbito del mismo, y para poder establecer si determinadas acciones u omisiones se inscriben o se sancionan. También es importante porque se prevé un intenso intercambio de datos con otros registros, para que no se puedan considerar cesiones de datos ilegales.

Se modifica la redacción en el sentido apuntado.

Artículo 2.

1. Si uno de los datos objeto de inscripción es la titularidad de las explotaciones, es innecesario señalar que también afecta la regulación a los titulares de las explotaciones.

Se modifica la redacción en el sentido apuntado.

2. Se considera más adecuado establecer el objeto de la inscripción, no una mera puntualización. Se trata de establecer los puntos de conexión que hacen que el presente proyecto de decreto pueda obligar a titulares que no se encuentran en el ámbito de la comunidad autónoma.

Se modifica la redacción en el sentido apuntado.

Artículo 3

Las definiciones deben estar en consonancia con las de los registros de cuyos datos se va a nutrir el REAFA, con ello se garantizan la seguridad jurídica y la interoperabilidad. Ambas cosas no se pueden llevar a cabo si se contemplan realidades distintas.

a) Parece una definición un poco complicada, con partes correspondientes a definiciones posteriores, cuando existe otra mucho más simple y aceptada en el tráfico jurídico que nos ocupa, la del sistema de pago único (Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores).

El artículo 4 del Reglamento (UE) N.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) no 637/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo, define "explotación" como "todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas y administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro". El concepto de explotación en una y otra norma, aun siendo conceptualmente similares, tienen importantes diferencias de matiz, dado que ambas normas versan sobre distintas materias y, consecuentemente, ponen el acento en distintos elementos. Si se adoptara esta definición, se complicaría enormemente la comprensión del Decreto (particularmente la relación explotación – unidad de producción - aprovechamiento), lo que comprometería los principios de seguridad jurídica y transparencia en los términos definidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) No hay que repetir una definición de otra norma, solo remitirse a ella.

Se reproduce la definición que recoge el artículo 2 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de explotaciones agrarias, para evitar al lector la carga de tener que buscar la citada norma. El reproducir esta definición, simplifica la comprensión del texto,

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	11/31

incrementa la transparencia y la seguridad jurídica.

e) La definición de titular, en estos términos, no es necesaria, por ser un concepto general.

No obstante, se ha considerado conveniente mantenerla para hacer hincapié en que puede serlo una persona física o jurídica, que es necesario que ejerza la actividad agraria (excluye a todos aquellos, aun cuando sean propietarios de tierras de labor, que no ejerzan la actividad directamente). Nuevamente se apela al principio de seguridad jurídica.

Recogemos el parecer de la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados: “De la definición del Proyecto de Decreto parece deducirse que una misma explotación puede ser administrada por varias personas físicas o jurídicas, que no es lo mismo que un grupo de personas físicas o jurídicas según establece el citado reglamento. Lo anterior, parece confirmarse tras la lectura de la definición de Unidad de producción y de Aprovechamiento en el artículo 3.c) y 3.d), respectivamente”.

Nos remitimos a la respuesta dada a la Dirección General de Ayudas Directas y Mercados que se extracta a continuación: “Una explotación sólo puede ser administrada por una persona física, jurídica o entidad sin personalidad jurídica. El número plural de “titulares” está previendo los casos de titularidad compartida conforme a Ley 35/2011, de 4 de octubre, de titularidad compartida de explotaciones agrarias”.

Artículo 4

1. La expresión correcta es “de naturaleza administrativa y acceso público”.

Se recomienda reconsiderar el carácter de acceso público, en apariencia sin restricciones del registro, ya que diversos elementos personales del mismo deberán estar protegidos contra el acceso indiscriminado. Hay que tener en cuenta que los datos económicos que va a contener y exponer son los más demandados en el tráfico legal e ilegal de datos. Todo ello siguiendo lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Se cambia la redacción en los términos indicados en el primer inciso.

Respecto del segundo párrafo, en el segundo inciso de este mismo apartado se indica que “Dicho acceso se realizará sin perjuicio de la protección de datos personales conforme al ordenamiento jurídico vigente en cada momento”.

3. Existe un fallo de numeración, falta la letra d) y debe ser subsanado.

Por otro lado se debería concretar si el presente apartado establece contenido del REAFA o fines del REAFA. Como se ha señalado en los comentarios al preámbulo y al artículo 1, los fines de la trazabilidad y la seguridad alimentaria no concuerdan con el contenido del presente apartado, que da satisfacción a otros fines contemplados en registros ya existentes y que no se cancelan.

Respecto del primer inciso, se subsana la errata en los ordinales.

Respecto del segundo inciso, el texto de este apartado es claro: “El REAFA contendrá toda la información necesaria para responder a los requerimientos de [...]”. Se está definiendo el contenido mínimo que albergará el REAFA. Respecto de los fines, atendiendo la informe de la

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	12/31

Secretaría General Técnica, se realiza un nuevo esfuerzo – tanto en el preámbulo como en el articulado – para que dar aun más claridad.

4. *En cuanto habla de sector público institucional no aclara si se circunscribe al andaluz o también incluye al estatal y local. Debe especificar también al estatal o de otras administraciones en general. De todas formas se debe limitar la cesión de estos datos a otras administraciones.*

El sector público institucional, es el que así se define en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas².

5. *Se recomienda reconsiderar la redacción este apartado, pues no parece del todo correcto exigir veracidad en unos datos que los interesados no han aportado a este registro, y que podrían estar en litigio en los procedimientos de los que provienen.*

El precepto deja recaer la responsabilidad de la veracidad de los datos sobre los interesados exclusivamente respecto de los que hayan sido aportados por ellos mismos mediante sus declaraciones de inscripción. Se transcribe literalmente el primer inciso del citado apartado: “La información en materia agraria y forestal obrante en el REAFA, se presumirá cierta salvo prueba en contrario, **siendo responsabilidad de los titulares la veracidad de los datos inscritos que tengan origen en sus declaraciones de inscripción**, cambio o actualización de datos y cese de actividad”.

6. *En este apartado se debería procurar eliminar cargas administrativas.*

La normativa que exige autorización para determinadas actividades, como no podía ser de otro modo, tiene rango de Ley. En consecuencia, de acuerdo con el principio de jerarquía de fuentes, no puede ser derogada por Decreto. El presente Decreto respeta estos procedimientos de autorización pero, en su artículo 15.4, prevé que en los supuestos recogidos en este apartado, “una vez obtenida la autorización correspondiente se procederá de oficio a la inscripción de la explotación en el REAFA.”

Artículo 5

1. *La expresión “la realización del análisis y la gestión de las explotaciones”, se contradice con la finalidad manifestada a lo largo del texto de garantizar la trazabilidad y la seguridad alimentaria.*

2 **Artículo 2.** *Ámbito subjetivo de aplicación.*

1. *.../..*

2. *El sector público institucional se integra por:*

a) *Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.*

b) *Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.*

c) *Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.*

3. *.../..”*

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/	PÁGINA	13/31

Dicha expresión pretende indicar que el REAFA permitirá realizar los estudios y gestión de información relativa a las explotaciones que resulte necesaria para la consecución de los objetivos. Se mejora la redacción, añadiendo al final del mismo *“a los efectos pretendidos por el presente Decreto”*.

2. *Se debería eliminar “que hayan sido objeto de inscripción”.*

Se modifica la redacción eliminando “que hayan sido objeto de inscripción”.

2.b) *No queda claro el concepto de dato de carácter público. En concreto la relación catastral de las parcelas no es un dato agrario o forestal, sino de carácter fiscal, que pueda ser usado para estos fines.*

En cualquier caso es un dato público. Cualquier persona puede consultar el catastro (excepto los datos personales asociados).

3. *Hay que señalar que se tenga en cuenta que determinados aprovechamientos pueden tener un titular diferente del de la explotación.*

Efectivamente, así es. En un mismo territorio, pueden convivir varias explotaciones con sus correspondientes titulares, cada una de ellas con una o varias unidades de explotación, y cada una de las cuales integradas por diferentes aprovechamientos .

Como comentario general, hay que señalar que no se regulan ciertas cuestiones como la organización y estructura, normas de funcionamiento interno, tipos de asientos registrales, efectos de la inscripción, asignación del código de identificación que sirva de base, tanto a las explotaciones, sus titulares y al documento de acompañamiento, así como de los concretos medios de verificación e impugnación. Todo lo anterior se trata de manera dispersa y superficial, no pudiendo quedar su concreción a un desarrollo posterior por medio de órdenes, máxime teniendo en cuenta que la puesta en funcionamiento del REAFA se considera a partir de la entrada en vigor del presente proyecto de decreto, sin que se contemple que la misma quede supeditada a un desarrollo normativo posterior.

Se asume la observación y se procede a integrar en este artículo las prescripciones que definen la organización interna del Registro y el sistema de asientos.

Artículo 6

Parece repetir el contenido del artículo 4.4.

Se asume la observación y se fusionan ambas precisiones en el artículo 6.

Artículo 7

No parece necesario establecer un artículo recordando lo establecido en la normativa estadística y de información ambiental.

Se considera necesario porque incluye otros contenidos que deben ser avalados por la normativa que se cita.

Artículo 9

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	14/31

El contenido de este artículo parece redundante con el artículo 5 y el 4. Lo único nuevo es que el cese de la actividad agraria determinará la cancelación de la inscripción.

No es redundante. El artículo 4 se refiere a la creación, información que debe contener, principios, presunción de veracidad, no exención de otras obligaciones, respeto a la normativa sobre protección de datos vigente en cada momento, mientras que el que nos ocupa define que actos concretos serán objeto de inscripción.

Artículo 10

1. La repetición de los fines que persigue la inscripción es innecesaria. Sin embargo se establece una masiva inscripción de oficio a través de la solicitud única, lo cual parece contradictorio con la inscripción a instancia de parte y de forma obligatoria. Deberían delimitarse más concretamente las inscripciones de oficio y la que lo sean a instancia de parte, de forma que no se creen duplicidades como en estos casos.

Respecto del primer inciso, se asume la apreciación y se cambia la redacción.

Respecto del segundo, obrando una parte importante de la información que precisa el REAFA en poder de las Consejerías competentes, procedente de distintos procedimientos, se procederá a realizar una carga inicial de datos en dicho registro, precisamente para aliviar la carga administrativa tanto a la Administración como a los administrados. Dicha carga inicial de datos en el REAFA, está prevista en el artículo 15.

2. Nos remitimos a la reflexión hecha al artículo 4.5.

Damos por reproducida la contestación a dicha reflexión.

3. La inscripción de oficio o a instancia de parte parece contradictoria con la regulación posterior.

No se nos identifica ninguna contradicción. No hemos detectado dicha incidencia.

Artículo 11

1. Nos remitimos a las consideraciones del Consejo de Defensa de la Competencia, respecto al uso de la figura de la declaración responsable en este caso, siendo más adecuada la figura de la comunicación. Nos remitimos a los artículos 69.1 y 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que definen ambas figuras, considerándose la comunicación como la más adecuada para las finalidades que se persiguen.

Toda esta parte del procedimiento de inscripción deberá adaptarse a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tal y como se contestó en su día al informe del Consejo de Defensa de la Competencia: "La obligación que impone el apartado 1 artículo 11 del proyecto de Decreto, es la de presentar la declaración dentro del mes siguiente al inicio de la actividad y no con carácter previo. A sensu contrario, no resulta preceptivo la presentación de la declaración para iniciar la actividad.

Respecto de la utilización de la declaración responsable en un momento diferido al inicio de actividad, acudiendo a los apartados 1 a 3 del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cierto es que, en una primera aproximación, parece tener un mejor encaje la herramienta de

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	15/31

la comunicación, dado que el apartado 3 permite presentarla “...dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente”. Sin embargo:

1. el citado precepto no veta expresamente la posibilidad de que la declaración responsable pueda tener el mismo tratamiento.
2. ambas figuras demandan un esfuerzo similar por parte de los administrados.
3. a lo largo del proyecto de decreto que nos ocupa, se realiza un enorme esfuerzo por agilizar y minimizar los esfuerzos administrativos que tengan que realizar tanto el administrado como la Administración. Es por ello que en su génesis se exploró el apoyo que podían brindar determinadas herramientas jurídicas, principalmente la declaración responsable y la comunicación. Sin embargo, lo que no se puede obviar es que la inscripción en el REAFA tiene notables consecuencias, pues dicha información interoperará con múltiples registros y será utilizada en número indeterminado, pero muy elevado, de procedimientos. Esto exige que dicha información esté dotada de cierta veracidad. El proyecto da un importante paso para en aras a la simplificación, agilidad y menor carga administrativa del procedimiento de inscripción, pero la necesidad de acreditación sigue latente porque algunos de los procedimientos que se sustanciarán con base en los datos del REAFA así lo requieren. Acudir al mecanismo de la comunicación resulta, pues, insuficiente, pues dicha institución tiene por objeto la comunicación de datos, careciendo de previsiones en torno a la acreditación. Por contra, por la declaración responsable el interesado “manifiesta, bajo su responsabilidad”, “que dispone de la documentación” acreditativa y “que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida”, cumpliendo de este modo el citado requisito en primera instancia y facilitando su posterior comprobación en caso de revelarse necesario.

Por los citados motivos, en la gestación del proyecto de decreto que nos ocupa se optó por la vía de la declaración de responsable y no por la de la comunicación que, quizás, en una primera aproximación parecía tener un acoplamiento más claro”.

1. Será por inicio de actividad u otra circunstancia objeto de inscripción.

Se añade el inciso “o cualquier otra circunstancia objeto de inscripción”.

2 y 3. Su contenido es superfluo, se deberán seguir los trámites establecidos con carácter general para todos los procedimientos.

Se suprimen.

4. Se debería hacer un esfuerzo de precisión. En todo caso parece ser redundante con el artículo 13.

Resulta absolutamente imposible definir apriorísticamente, los controles que se puedan realizar en el futuro. Evidentemente, serán controles sobre los datos que constan en el REAFA, pero no se puede definir ni resultaría conveniente (básicamente porque en el futuro pueden aparecer otros), las fuentes con las que se va a realizar el contraste. Por otro lado, no existe redundancia, pues en este precepto se articula como un trámite concreto y específico,

Código:640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/	PÁGINA	16/31

mientras que el artículo 13, habilita a la Administración a realizar un control ex post en cualquier momento posterior (viene a ser igual que el trámite de audiencia: La Ley 39/2015 otorga el derecho al administrado de acceder al procedimiento y formular alegaciones en cualquier momento anterior a la propuesta resolución pero, además, crea un trámite en el que – con las importantes excepciones que se citan – se da específicamente ocasión al interesado de tener a la vista el expediente y se le concede un plazo para formular alegaciones).

Artículo 12

Hay que estar a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a las posibilidades y situación real de las aplicaciones necesarias. Además habrá que establecer los datos que, en función de lo establecido en la legislación de protección de datos pueden ser objeto de cesión.

Reproduce exacta y literalmente lo que dice el artículo 5.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Existe una errata en la cita del artículo.

La cita es correcta³.

Artículo 13

Se deben concretar mejor los pasos de comprobación, subsanación e inscripción o rechazo de la misma, que deberá ser motivado y tener unos efectos que no se establecen en la presente norma.

Se trata de un procedimiento de declaración responsable. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, está exento de la obligación de resolver expresamente⁴. Consiguientemente, entendemos que no procede

³ Artículo 3 de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía: “Definiciones.

A los efectos de la presente ley se entiende por:

„/„

ñ) Organismos de evaluación de la conformidad: las personas físicas o jurídicas encargadas de hacer, de manera independiente, una declaración objetiva de que los productos o servicios cumplen unos requisitos específicos, de acuerdo con lo establecido en normas de carácter obligatorio o en normas y pliegos de condiciones específicas que incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección. Dentro de estos se distinguen:

- 1.º Órganos de control de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas: órganos del consejo regulador de la denominación que verifican el cumplimiento del pliego de condiciones.
- 2.º Organismos independientes de control: organismos autorizados por la consejería competente en materia agraria y pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre «Requisitos generales para entidades que realizan la certificación del producto» (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).
- 3.º Organismos independientes de inspección: organismos autorizados por la consejería competente en materia agraria y pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección» (ISO 17020 o norma que la sustituya)”.
4.º Laboratorios de control: centro público o privado en el que se realizan ensayos fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos de productos agrarios y alimentarios para el control de la calidad de los mismos”.

⁴ **Artículo 21.** Obligación de resolver.

1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	17/31

definir ningún trámite de subsanación, sin perjuicio de que, en caso de resultar necesario se acuda a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como legislación básica y subsidiaria de todo el ordenamiento jurídico-administrativo. En cuanto al rechazo de la inscripción, se trata en el artículo 13.3, cuyo tenor literal es el que sigue: “Cuando, aún habiéndose seguido los trámites previstos en los apartados anteriores, no se hubieran podido obtener los datos necesarios para proceder a la inscripción, se notificará esta circunstancia a los interesados, con indicación de la obligación de presentar una nueva declaración que, conteniendo todos los extremos necesarios para ello, permita la inscripción de la explotación en el REAFA”.

El tercer párrafo aparece numerado con el 4. En este punto se establece una obligación de subsanación de la declaración, que se superpone a la inscripción de oficio, parece un tanto contradictorio.

Se corrige la citada errata.

Artículo 14

1. No es adecuado el plazo de seis meses, y nos remitimos a las reflexiones que hace el Consejo de Defensa de la Competencia.

Dado que se realiza la inscripción a instancia del interesado, hay que recordar que en principio sin necesidad de presentar ningún documento, pues todos los datos que se inscriben constan ya en otros registros de las consejerías implicadas o las administraciones públicas, mediante declaración responsable, o más correctamente una comunicación, que se presumirá cierta, la inscripción debe ser automática, sin perjuicio de las comprobaciones posteriores que se puedan acordar (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Se admite la sugerencia y se modifica el plazo a 3 meses.

Artículo 15

No se comprende el porqué de establecer un procedimiento con plazos distintos y sin audiencia al interesado para la práctica de las anotaciones de oficio. Además del procedimiento general de anotación de oficio aquí contemplado, hay otros dos específicos: el derivado de la solicitud de ayuda única y el derivado de las situaciones del artículo 4.6 del proyecto de decreto, no especificándose si siguen o no el procedimiento general.

Se deberían así mismo establecer qué ficheros se usan para contrastar informaciones y si es legalmente posible su uso para ello y de cuáles ficheros se derivarán inscripciones de oficio, esto es cuales inscripciones estarán dobladas o serán redundantes con otros ficheros. Hay que recordar que aquellos datos se recogieron con unos fines que seguramente no coincidan con los del REAFA.

Una vez más hay que recordar que el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.

Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	18/31

impone la forma de realizar las comunicaciones a los interesados, tanto las materiales como las electrónicas, así como la obligación de realizar un trámite de audiencia que no aparece en este artículo (artículo 53.1, especialmente la letra e), y artículos 76 y 82, de la citada norma).

Respecto de las observaciones contenidas en el primer párrafo:

Por un lado, no se entiende a que se refiere con “plazos distintos”. Es evidente que las formas de iniciación de uno y otro son distintas y que la primera, al depender del interesado, está sujeta plazo, mientras que la segunda depende del momento en que la administración tenga conocimiento del inicio de la actividad. Por otro lado, se trata de un mero procedimiento de inscripción, como pueda ser el de inscripción de maquinaria agrícola en el ROMA (Real Decreto 1013/2009), y que se configura de un modo similar al resto de procedimientos de este tipo.

Por otro lado, no existen 3 procedimientos de inscripción de oficio en el REAFA. Sólo existe uno. Si la Administración dispone y tiene por ciertos de datos suficientes, se producirá la inscripción de oficio y esto es independiente del origen (sea o no la PAC – no debe confundirse la inscripción de explotaciones en el REAFA con la declaración anual de producciones anuales para su inscripción en el REAFA y en el REGEPA - o provengan o no de una autorización previa).

Respecto de las observaciones contenidas en el segundo párrafo:

Indicar los ficheros de la Junta de Andalucía a los que se acudiría para obtener la información necesaria para proceder a la inscripción de oficio, supondría limitar el procedimiento a estas fuentes, descartando otras fuentes más eficaces (por la cantidad, la calidad, o la certeza de veracidad de la información) que puedan surgir en el futuro. Ello derivaría en una mayor carga administrativa y atentaría contra los principios de proporcionalidad y de eficiencia, en los términos definidos por los apartados 3 y 6 del artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre⁵, pues serían menos las explotaciones que podrían inscribirse de oficio y, consecuentemente, más la que tendrían que inscribirse a instancia de parte. Añadir que no habrá “inscripciones dobladas” o “redundantes”. El REAFA tiene su propio y exclusivo objeto. Además, siempre que sea posible, y esto es una constante preocupación a lo largo del texto, no se copiarán datos al REAFA, es decir, no se duplicará información, sino que el REAFA interoperará con otros registros ofreciendo los datos originales (del registro primigenio) mediante un sistema de consulta en tiempo real.

Respecto a las observaciones contenidas en el tercer párrafo:

En un primer momento, se intentará inscribir de oficio todas aquellas explotaciones de las

⁵ **Artículo 129. Principios de buena regulación.**

1. .../..

3. *En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.*

.../..

6. *En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos”.*

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	19/31

que se tengan los datos necesarios con un grado de fiabilidad asumible. Esto supone la inscripción de miles de explotaciones en el REAFA. La practica de trámite de audiencia en esas miles inscripciones resulta inasumible. Por otro lado, como se adelantaba, este es un procedimiento que se sustancia a través de una declaración responsable, por lo que, de conformidad con el artículo 21.1 no precisa resolución. No siendo preceptiva la resolución, puede considerarse que tampoco lo es el trámite de audiencia dado que, el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre⁶, establece un momento muy concreto para la realización del trámite, que es una vez se haya instruido todo el procedimiento (en este caso no hay instrucción), e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución (momento que tampoco va a llegar, porque no hay resolución).

En cualquier caso la institución que nos ocupa, tal y como se propone, no resulta, en absoluto, generadora de indefensión para los interesados, pues, por un lado el precepto del que tratamos, cumple con las mismas garantías para el administrado que prevén los artículos 53.1.e)⁷ y 82⁸ de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

1. al exigir la publicación de las propuestas de inscripción de oficio en las páginas web de las Consejerías competentes dando plazo de tres meses para presentar las alegaciones que procedan.
2. Al otorgar a los interesados la posibilidad de solicitar, en cualquier momento, la modificación o cancelación de la inscripción, de acuerdo con lo previsto en este proyecto de Decreto.

Artículo 16

En referencia a la obligación de presentar la declaración anual de producciones establecida en el artículo 4 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, hay que manifestar que se trata de una obligación redundante, según queda claro en el punto 4, ya que esta declaración no exime de otras.

Hay que recordar que en el anexo II del real decreto citado se exige también que se manifieste si existe venta directa a los consumidores.

La declaración de exención, frase final, "mediante cualquier otro sistema", debería completarse con
⁶ **Artículo 82. Trámite de audiencia.**

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

⁷ **Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.**

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

a)/..

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

..../..

⁸ **Artículo 82. Trámite de audiencia.**

1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

..../..

Código:640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/	PÁGINA	20/31

que por orden del consejero se establecerá la lista completa de los sistemas.

Respecto al primer párrafo, indicar que el presente proyecto de Decreto no crea la obligación de declaración anual de la producción, que ya era preceptiva conforme al artículo 4 del *Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola*. Simplemente se limita a indicar que la información que se declare será acopiada en el REAFA, o lo que es lo mismo, que el Registro Autonómico al que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del citado Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, en Andalucía es el REAFA.

Respecto del segundo párrafo, el anexo II del Real Decreto citado **NO** exige que se manifieste si existe venta directa a los consumidores.

Respecto del tercer párrafo, conforme al apartado 3 del artículo 4 del citado Real Decreto, “Los agricultores que notifiquen dicha información por cualquier otra vía, estarán exentos de cumplir las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2. A tal efecto la Solicitud Única de ayudas de la PAC o POSEI tendrá consideración de notificación para la inscripción en el REGEPA”. Es decir, el precepto que nos ocupa, no hace sino reproducir - a efectos de dotar la norma de la mayor seguridad jurídica - con otras palabras (sustituyendo “por cualquier otra vía” por “cualquier otro Sistema de Información”), lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero. No parece oportuno, adquirir cargas y compromisos que no resulten necesarios o convenientes y que ni siquiera están previstos en el Real Decreto al que se pretende dar cumplimiento, ni postergar la aplicación de esta medida cuyo objetivo es aliviar todo lo posible las cargas administrativas impuestas por el citado Real Decreto y simplificar el procedimiento. Además, nunca podría ser una lista tasada y siempre estaría sujeta a cambios, dado que con el tiempo, en aras a disminuir la carga administrativa, se seguirían sumando nuevos procedimientos (bien porque se trata de procedimientos de nueva creación, bien porque al modificarse alguno de los existentes resulte una mejor fuente de datos que la se venía empleando) y saliendo procedimientos (porque han sido derogados o modificados, perdiendo utilidad a estos efectos).

Por último, indicar que cuando el apartado 4 de proyecto de Decreto indica que “La realización de la declaración prevista en los apartados anteriores, no exime de la obligación de presentar otras declaraciones, comunicaciones, u obtener autorización previa, cuando resulte preceptivo de conformidad con la normativa aplicable a cada tipo de aprovechamiento”, se está refiriendo, evidentemente, a otras declaraciones, comunicaciones o autorizaciones distintas de las del REGEPA.

Artículo 17

1. *La vigencia desde la fecha de la declaración parece que excluye la inscripción de oficio.*

Se asume la observación y se modifica la redacción para aclarar el inicio de la vigencia.

2. *Hay que estar a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.*

Precisamente, el sentido de este ordinal es dar pleno cumplimiento a los apartados 2 y 3 del

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	21/31

artículo 28⁹ y 1.c) del artículo 53¹⁰ de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. *El carácter gratuito de la certificación, no parece necesario establecerlo, se presume.*

Se asume la observación y se modifica la redacción suprimiendo este inciso.

Artículo 18

1. *El mantenimiento histórico de la inscripción deberá establecerse más detalladamente y tener un límite. Hay que tener en cuenta que la materia se regula en la legislación de archivos.*

Podemos cambiar el apartado del siguiente modo:

Redacción actual:

1. Las inscripciones en el REAFA serán canceladas cuando la explotación deje de cumplir los requisitos para figurar inscrita en el mismo. No obstante, las inscripciones canceladas seguirán figurando en el histórico del Registro, a efectos de mantener la

9 Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

1. .../..

2. *Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.*

En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. *Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.*

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación

.../..

10 Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

1. *Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:*

a) .../..

c) *A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.*

d) .../..

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/.

Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	22/31

mayor trazabilidad posible.

Redacción que se propone:

1. Las inscripciones en el REAFA serán canceladas cuando la explotación deje de cumplir los requisitos para figurar inscrita en el mismo. No obstante, las inscripciones canceladas seguirán figurando en el histórico del Registro, a efectos de mantener la mayor trazabilidad posible. En las inscripciones canceladas figurará una nota marginal que así lo indique, con la fecha de efectos, la fecha en que se practicó este asiento, si la cancelación fue promovida a instancia de parte o de oficio y el motivo.

No tenemos conocimiento de que esta previsión conculque norma alguna de la legislación de archivos o de cualquier otra y tampoco se identifica por la Secretaría General Técnica cual es la posible vulneración.

2. *Deberá detallarse mejor el procedimiento de baja, sobre todo el de oficio, repitiéndose las reflexiones realizadas en el artículo 15.*

Podemos cambiar el apartado del siguiente modo:

La redacción actual es la que sigue:

2. La baja podrá efectuarse a petición de la persona titular, mediante en formulario al que se refiere el apartado 1 del artículo 11, o de oficio, en este último caso de acuerdo con la información existente en los registros, ficheros y bases de datos de la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería o de medio ambiente, previa audiencia de la persona interesada, en su caso. La baja de la explotación en el REAFA practicada de oficio, será notificada a las personas titulares de la misma.

Podríamos cambiarla esta otra:

2. La baja podrá efectuarse a petición de la persona titular, mediante en formulario al que se refiere el apartado 1 del artículo 11, o de oficio, en este último caso de acuerdo con la información existente en los registros, ficheros y bases de datos de la Consejería competente en materia de agricultura y ganadería o de medio ambiente, previo trámite audiencia otorgado en favor de los interesados, que se sustanciará conforme a lo dispuesto en el artículo 83 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La baja de la explotación en el REAFA practicada de oficio, será notificada a las personas titulares de la misma.

Artículo 19

1. *El documento DAT, se crea para los productos que no tienen un documento propio en los sistemas de seguridad alimentaria. Hay que tener en cuenta que es una nueva carga a los productores, que ni la autoridad comunitaria, ni la nacional, han considerado necesaria, pese a lo minucioso de la legislación en esta materia.*

La finalidad de garantizar la legítima procedencia de los productos agroforestales, puede ser positiva y aceptada por el sector productivo, lo cual no debe llevar por sí mismo a aceptarlo como carga, pues hay que valorar la efectividad que pueda tener, pues siendo el robo una actividad que se realiza en la clandestinidad, es lógico que también el transporte de sus frutos lo sea.

Indicar no es cierto que la autoridad comunitaria, la nacional y la local no la hayan considerado necesaria. Sólo en el ámbito nacional la mayoría de las Comunidades Autónomas

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	23/31

disponen de algún tipo de documento acompañamiento al transporte para los productos agrarios y forestales de mayor producción o importancia comercial en su territorio. Podemos citar los siguientes ejemplos:

- La Comunidad Valenciana, por Orden 11/2013, de 13 de agosto, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por la que se desarrollan algunos aspectos del Decreto 75/2012, de 18 de mayo, del Consell, por el que se regula la obligatoriedad de mantener la trazabilidad en los productos agrícolas de la Comunidad Valenciana y su primera comercialización.
- La Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, por Orden de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las disposiciones de aplicación relativas a los documentos que acompañan al transporte de productos vitivinícolas y del certificado de denominación de origen protegida o de indicación geográfica protegida y certificación del año de cosecha o de la variedad o las variedades de uva de vinificación.
- La Comunidad Autónoma de Extremadura: Por Decreto 171/2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de 18 de octubre, sobre trazabilidad de uvas.

Pero es que, ya dentro del ámbito de la nuestra Comunidad Autónoma, han surgido documentos de acompañamiento al transporte para determinados productos agrarios (principalmente vitivinícolas y aceituna) localmente.

Así la Subdelegación de Gobierno en Córdoba crea su propio DAT para la aceituna en el año 2016 (BOP Córdoba de 15 de noviembre de 2016, publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Subdelegación del Gobierno en Córdoba). En este sentido han ido surgiendo diversos DAT para distintos productos agrícolas en Sevilla, Granada, Almería, Jaén...

Además, con fecha de 27 de julio del pasado año La Delegación del Gobierno de Andalucía promulgó la "Instrucción sobre la ordenación de la circulación, recepción y venta de productos en las campañas agrarias), la cual ese encuentra disponible en la web del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el apartado "Delegaciones-Delegaciones del Gobierno-Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía-GUIA CONDUCE".

De lo anteriormente expuesto, se puede colegir razonablemente que:

- 1.** Existe una importante necesidad en el sector que la normativa actual no satisface.
- 2.** Que vista la situación actual, es menester dar una solución homogénea para todo el territorio andaluz y terminar con la proliferación de documentos amparados en normas de distinto rango, que emanan de diferentes autoridades y se circunscriben a distintos ámbitos territoriales, con dudoso amparo jurídico y, por las razones apuntadas, escasa eficacia práctica.

La eficacia del documento que se propugna es prometedora, pero desde luego lo que no resulta eficaz es no hacer nada.

2. Se debería reflexionar sobre la compatibilidad del presente documento con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ya que es una

Código:640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/	PÁGINA	24/31

clara carga y limitación al ejercicio de una actividad económica que no está establecida de forma general.

Hay que recordar que en todo caso los transportes que se realicen sin este documento son legales y adecuados, si se pretende otra cosa no se han hecho las debidas consideraciones en cuanto a la limitación de la actividad económica que implica y no se han modificado las normas legales que regulan los diversos transportes.

Se ha reflexionado profundamente sobre esta materia. El Consejo de Defensa de la Competencia ya se pronunció al respecto y este Centro Directivo evaluó el informe que emitió el citado organismo reaccionando con una meditada respuesta, a la cual nos remitimos y damos aquí por reproducida, en la que se mantiene que el DAT que se propone en el presente proyecto de Decreto no sólo no limita la libertad de competencia, sino que además presta ciertas garantías contra prácticas que terminan derivando en situaciones de competencia desleal.

4. Respecto al formato electrónico, dadas las fechas en las que previsiblemente entraría en vigor el presente proyecto de decreto, sería deseable desarrollarlo de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, es coincidente con las conclusiones que se manifiestan en este punto del presente informe.

El presente proyecto ha sido redactado tomando la Ley 39/2015 como ley básica y marco normativo de referencia. El informe que trae causa a la presente contestación no tiene en cuenta las fechas en las que se prevé la publicación al tratar el “Bloque de materias electrónicas” en donde indica que

“En lo referente al bloque de materias electrónicas necesarias para la tramitación del procedimiento, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un lado, en su disposición transitoria cuarta, establece que «Mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, las Administraciones Públicas mantendrán los mismos canales, medios o sistemas electrónicos vigentes relativos a dichas materias, que permitan garantizar el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones...». Y por otro, respecto de la Administración del Estado, dicha regla general tiene una determinación específica, señalando en su disposición transitoria segunda que hasta la no entrada en vigor de las previsiones relativas al registro electrónico y el archivo electrónico único, en el ámbito de la Administración General del Estado se aplicarán:

«a) Durante el primer año, tras la entrada en vigor de la Ley, podrán mantenerse los registros y archivos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley.

b) Durante el segundo año, tras la entrada en vigor de la Ley, se dispondrá como máximo, de un registro electrónico y un archivo electrónico por cada Ministerio, así como de un registro electrónico por cada Organismo público.»

No obstante, dichas previsiones hay que relacionarlas necesariamente con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, que establece que las materias relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	25/31

habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico no producirán efectos hasta transcurridos dos años de la entrada en vigor de la Ley, esto es, el 2 de octubre de 2018 (disposición final séptima).

En esta línea se manifiesta el Gabinete Jurídico de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en su Informe HPPI00555/16 de 7 de febrero de 2017, al establecer las siguientes conclusiones:

«1. En tanto en cuanto no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico el 2 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, cualquier precepto de la Ley que se encuentre directamente vinculado con dichas materias, requerirá la plena efectividad de estas herramientas electrónicas para que a su vez puedan tener plenos efectos.

2. Conforme a lo anterior la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones impuesta por el artículo 14 de la LPACAP, queda diferida hasta octubre de 2018 en tanto en cuanto tiene íntima vinculación con el ámbito material de la disposición adicional séptima de la Ley 39/2015.

3. Hasta que produzcan efectos dichas previsiones, las normas que servirán de fundamento jurídico en los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la LPACAP serán las previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.»

Lo expuesto en el citado informe, conllevaría la no exigencia de la obligación de relacionarse con la Administración Pública a través de medios electrónicos para los potenciales solicitantes de las mismas hasta 2 de octubre de 2018”.

Artículo 20

Además de considerarse el formato electrónico, el DAT debería sustituir a otros documentos de transporte similares, en otro caso se están imponiendo cargas administrativas redundantes que no son queridas por nuestro ordenamiento.

En este sentido, se recoge a modo de ejemplo la alegación que reclama que si en el presente documento no se recoge el carácter ecológico del producto transportado, ello derivará en duplicar la carga documental en estos productos, lo cual está totalmente en contra del principio de simplificación.

No existen cargas administrativas redundantes, pues el apartado 2 del artículo 19 del proyecto de Decreto que nos ocupa indica que “El DAT deberá acompañar al traslado de los

Código:640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	26/31

productos sin transformar obtenidos de las explotaciones agrícolas, forestales y agroforestales ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde la unidad de producción de origen hasta un lugar de almacenamiento o su primer destino de comercialización, salvo que la normativa específica prevea otro documento que acredite la legítima tenencia de los mismos por el transportista. Dicha obligación se mantendrá en las operaciones de transporte entre dos unidades de producción de la misma explotación que no guarden continuidad geográfica”.

Por lo que respecta, en concreto, a los productos ecológicos, las explotaciones, los titulares y los aprovechamientos no tienen carácter ecológico, lo que tiene carácter ecológico es el producto. Este producto está sujeto a unas normas específicas de etiquetado, establecidas en su normativa específica que nada tienen que ver con el transporte de los mismos.

Artículo 21

Una vez más se deberá reflexionar sobre la necesaria adaptación de la presente norma a las prescripciones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en cuanto a las potestades de inspección, la forma de hacerlas, personal habilitado para ello y la posibilidad del uso de datos recabados en otros procedimientos o con otros fines, para su uso en el presente procedimiento.

Se ha reflexionado profusamente sobre ello y se ha concluido la plena compatibilidad entre este proyecto y la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este sentido no se ha identificado ninguna posible vulneración jurídica.

Artículo 22

Hay que tener en cuenta que los incumplimientos de esta norma, solo podrán ser sancionados en la medida en que se puedan encuadrar en los tipos de la ley de calidad agroalimentaria, de sanidad vegetal y animal, y similares.

Efectivamente, eso es lo que indica en el citado precepto, como no podía ser de otro modo, pues el derecho sancionador está sujeto a reserva de Ley.

Disposición Adicional 1ª y 2ª.

No se trata de unas disposiciones finales, se trata de una regulación que debería formar parte del articulado ordinario.

Se acoge la sugerencia y se reubica este texto en el articulado.

1ª. No queda clara la relación de estas disposiciones con lo establecido en el artículo 4, en el 14 y 15, principalmente. Hay que tener en cuenta la regulación sobre protección de datos, las finalidades declaradas para la toma de datos y las posibilidades de cesión y tratamiento de los mismos. Además se aprecia un exceso claro en la toma de datos si la finalidad pretendida es la trazabilidad (v.gr. los datos fiscales y de la seguridad social).

Los artículos 4, 14 y 15, hablan de características estructurales y de funcionamiento del REAFA y sobre el procedimiento de inscripción. Esta disposición adicional, que se reubica ahora en el articulado, identifica los registros con los que interoperará el REAFA. Es decir, identifica las fuentes que serán empleadas para realizar las comprobaciones que procedan (caso de inscripción a instancia de parte) o la obtención de los datos necesarios para la

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	27/31

inscripción (caso de inscripción de oficio).

Disposición Adicional 3ª

Se está modificando una declaración procedente de una ley nacional y para un registro que depende del Estado, no es por tanto adecuada. Y ello porque cuando lo único a declarar sea la situación de compartida, el formulario y el procedimiento no son los adecuados.

Primero: No se está modificando ninguna declaración de ninguna Ley nacional. De hecho, ni siquiera se está desarrollando reglamentariamente, lo cual tampoco conculcaría la jerarquía de fuentes, pues precisamente para ello están los reglamentos. Se está asumiendo el mandato legal de la administración de establecer un modelo normalizado. Volveremos sobre ello más adelante.

Segundo: La Ley 35/2011, de 4 de octubre, especifica con meridiana claridad en el apartado 1 de su artículo 6 que **es la correspondiente Comunidad Autónoma quien debe constituir el Registro de Titularidad Compartida**. Obviamente, deberá dotar de los medios necesarios al Registro (incluidos formularios) para facilitar el ejercicio de este Derecho por los ciudadanos. Por si todavía cupiera alguna duda, el mismo precepto, en su apartado 4 indica que **“El registro correspondiente de gestión autonómica expedirá un certificado en el que consten, como mínimo, los datos a que se refiere el apartado 2”**. Cosa distintas es que exista un Registro, para la coordinación registral, con unos datos mínimos (entre los que no están, por ejemplo, los de carácter patrimonial, que si debe asumir, ex lege, el Registro Autonómico)¹¹.

Tercero: La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, no contiene ningún formulario para la declaración compartida.

Cuarto: El formulario se propone, precisamente, en el más riguroso cumplimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según cuyo apartado 4 de su artículo 66 indica textualmente: **“Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes**. Estos modelos, de uso voluntario, estarán a disposición de los interesados en las correspondientes sedes electrónicas y en las oficinas de asistencia en materia de registros de las Administraciones Públicas.

Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan.”

Quinto: La ley 39/2015, de 1 de octubre, en el apartado 6 del citado artículo 66¹², **habilita expresamente a la Administración a que establezca modelos específicos de solicitudes, los cuales serán de uso obligatorio por los interesados**.

¹¹ **Artículo 7.** Coordinación registral.

1. En el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino existirá un Registro en el que se reflejarán las declaraciones de titularidad compartida, y sus variaciones, recibidas del órgano competente de las distintas comunidades autónomas.
2. Dicho Registro deberá contener, al menos, la identificación de las personas titulares de la explotación agraria de titularidad compartida y, en su caso, del representante designado por éstas, así como la identificación de la explotación y su número de identificación fiscal.

¹² **Artículo 66.** Solicitudes de iniciación.

1. ...
6. Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	28/31

Disposición Adicional 4ª

Parecería adecuado que formara parte de la disposición adicional primera, haciendo los mismos comentarios que respecto a ella.

Se asume la observación y se reubica el contenido de esta disposición adicional.

Disposición Derogatoria.

1. *La Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, punto 41, establece que “Se evitarán cláusulas genéricas de derogación del derecho vigente que en ningún caso pueden sustituir a la propia enunciación de las normas derogadas”.*

Sin embargo, la fórmula rituaría “Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en este decreto”, es plenamente actual y sigue siendo utilizada, con carácter general, en la mayoría de las normas que se promulgan, tanto estatales como autonómicas.

Por poner algunos ejemplos:

- la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o
- la disposición derogatoria única de la muy reciente Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

Se mantiene la redacción.

2. *Se recomienda revisar el censo de los registros vigentes en las dos consejerías afectadas por el presente decreto, al objeto de eliminar todos aquellos que se dupliquen con el registro que ahora se crea, y con ello eliminar efectivamente cargas administrativas.*

Asimismo se reitera lo dicho anteriormente en este informe en cuanto a la derogación normativa, según lo dispuesto en el artículo 129.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, para generar un marco normativo integrado, claro y de certidumbre, se recomienda se examine por ese Centro Directivo, si el nuevo texto normativo afecta a otras normas además de las citadas en la disposición derogatoria, al objeto de incluirlas. Por otra parte, también sería posible aprovechar la aprobación del presente proyecto de decreto para derogar otra normativa que, según el conocimiento del centro directivo, se encuentre vigente, pero sin aplicación efectiva, pudiendo crear confusión, o derogada tácitamente, siendo siempre preferible por la citada seguridad jurídica la derogación expresa.

Reiterar que dichos análisis ha sido realizado en varias ocasiones antes y durante la tramitación del presente proyecto de Decreto.

Disposición Final 1ª

Debería ser habilitación solo al titular de la consejería competente en agricultura, ya que es la promotora del proyecto normativo, la consejería en la que va a residir el registro y la que estará encargadas de su gestión y mantenimiento. Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el consejero competente en medio ambiente de proponer lo que estime necesario para la mejor

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/ Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	29/31

regulación del registro. Otra solución estimamos que puede ser causa de problemas y disfunciones.

Otra consideración de técnica normativa, es que en esta disposición se contemplan dos tipos de habilitaciones: la modificación de los Anexos, por un lado, y el dictado de disposiciones de desarrollo, por otro. No obstante, ello tiene que ser objeto de dos disposiciones diferentes:

- *Disposición adicional, si lo que se pretende es realizar un mandato o autorización no dirigido a la producción de normas jurídicas.*
- *Disposición final si, por el contrario, lo que se pretende es realizar autorizaciones y mandatos dirigidos a la producción de normas jurídicas (habilitaciones de desarrollo y de aplicación reglamentarios).*

En base a lo anterior, se proponen las siguientes disposiciones:

- *“Disposición adicional xx. Facultad de modificación.*

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia agraria para modificar los Anexos I, II y III, en función de la evolución del proceso de integración sectorial y del valor de las producciones comercializadas.”

- *“Disposición final xx. Desarrollo y ejecución.*

Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia agraria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto.”

Se asume la observación y se modifican los textos en el sentido propuesto.

Anexos

- Se recuerda que los Anexos deben reproducir fielmente lo dispuesto en el articulado, al objeto de no incurrir en contradicción que pudiera dar lugar a una diferente interpretación del mismo o solicitar datos que no están contemplados en el articulado, ni documentación que ya figure en otros registros.

Además, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece claramente el derecho de los interesados a no presentar documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas (artículos 28 y 53.1.d).

En el presente caso se incurre en contradicciones entre los impresos y los artículos y confusión entre el contenido de una comunicación y el de una declaración responsable, según se reflexionó más arriba y remitiéndonos al informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía.

Además se recuerda la obligación de homologación de los impresos al objeto de que puedan ser incluidos en la base de datos de procedimientos administrativos. Esta obligación corresponde a ese centro directivo.

Hay que estar a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como a las posibilidades y situación real de las aplicaciones necesarias. Además habrá que establecer los datos que, en función de lo establecido en la legislación de protección de datos pueden ser objeto de cesión.

Todas estas prescripciones han sido tenidas en cuenta. Las observaciones del Consejo de Defensa de la Competencia fueron analizadas y se realizaron las correcciones oportunas.

OTRAS CONSIDERACIONES/OBSERVACIONES

Por cuestiones logísticas y estratégicas (algunos desarrollos informáticos que prestan

Código:640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/			
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			
FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	640xu852N1CQ7CZDtMw8aDdqhv9yh/	PÁGINA	30/31

cobertura a las instituciones que se pretenden constituir con el presente proyecto de Decreto van a sufrir algún retraso) los anexos “DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE EXPLOTACIÓN O DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y FORESTALES DE ANDALUCÍA (REFA)” y “DECLARACIÓN ANUAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA” se desacoplan del presente proyecto de Decreto y serán objeto de una Orden posterior.

EI JEFE DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

Fdo. electrónicamente: Marcelino Bilbao Arrese

Código:64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

FIRMADO POR	MARCELINO BILBAO ARRESE	FECHA	27/04/2018
ID. FIRMA	64oxu852N1CQ7CZDtmW8aDdqhv9yh/	PÁGINA	31/31